

66.<sup>a</sup> REUNION. 7.<sup>a</sup> SESION DE PRÓRROGA

PRESIDENCIA DEL DR. ELISEO CANTON

**Diputados presentes:** Acosta, Agote, Alvarez (A.), Alvarez (J. M.), Anchorena, Arias, Avellaneda, Ayarragaray, del Barco, Bouquet, Bréard, Calderón, Calvo, Cárcano, Carlés (C.), Carlés (M.), Carranza, Castañeda Vega, Castex, Conforti, Costa, Crouzeilles, Day, Echagüe, Escobar, Etcheverry, Ferrer, Fonrouge, Freire, Galigniana Segura, García, García Vieyra, Goenaga, González Bonorino, Guasch Leguizamón, Guevara, Hernández, Iturbe, Lacasa, Lassaga, Lavié, Lezica, López (P. C.), López Mañán, Loza, Lubari, Luro (P. O.), Luro (S.), Llobét, Meyer Pellegrini, Molina (E.), Molina (M.), Montes de Oca, Moreno, Moyano (F. J.), Mugica, Oliver, Olivera (B.), Olmedo, Padilla (E. E.), Padilla (M. M.), Parera (F. M.), Parera (R. A.), Paz (A. C.), Penna, Peña, Pera, Pérez Virasoro, Pinedo, Roca, Rodríguez Jurado, Santamarina, Sosa Carreras, Terán, Varela, de la Vega, Vernazza, Vocos Giménez, Zambrano.—**Ausentes con licencia:** Bengolea, Candiotti, Gómez, Gonnet, López (M. E.), Ortiz.—**Con aviso:** Alsina, Bonifacio, Cordero, Etcheopar, Fraga, Frías, Garrido, Iriondo, Maza, Olivera (G. P.), Paz (M.), Revilla, Ruiz Moreno, Saavedra Lamas, Tenreiro, Vega.—**Sin aviso:** Bejarano, Beltrán, Cernadas, Correa, Estrada, García González, Leiva, Méndez Casariego, Moyano (R.), Pinasco, Rivas, Serrey, Vergara.

SUMARIO N.º 66

1	5
Aprobación del acta de la sesión anterior.	Mociones referentes al despacho de créditos suplementarios.
2	6
Mensaje del Poder ejecutivo devolviendo con observaciones 14 proyectos de ley relativos á jubilaciones y pensiones.	Aprobación de un proyecto de ley abriendo un crédito suplementario al ministerio de marina por 309.704 pesos para gastos del ministerio de marina.
3	7
Mensaje del Poder ejecutivo y proyecto de ley: exonerando de derechos aduaneros á materiales destinados á la construcción de puentes en la provincia de Corrientes. Se aprueba el proyecto.	Aceptación de las modificaciones del Senado al proyecto de ley relativo á la ciudadanía de jefes y oficiales extranjeros.
4	8
Solicitud relativa al fomento del territorio de la Pampa.	Consideración en particular del proyecto de reforma de la ley electoral.

para estar de acuerdo con nuestra tradición parlamentaria.

**Sr. Fonrouge**—Pido la palabra.

Las observaciones que hace el señor diputado por la Capital, indudablemente para los colegas que ignoran antecedentes que han llegado á oídos, por ejemplo, del que habla, les harían quizá vacilar y aun cambiar de opinión, con respecto al primer propósito que se tuvo en vista con el proyecto sancionado por la Cámara de diputados.

Efectivamente, — y el diputado que habla pensó así también — se trataba de discernir un honor á los militares comprendidos en esa disposición; pero posteriormente ha corrido la versión de que este honor, que hasta cierto punto reviste los caracteres de una imposición, puesto que ya á ser necesario que estos militares se enrolen y dado que se trata de una obligación que debe regir para todos por igual, no era aceptada por ellos.

Hay, en efecto, muchos militares que no quieren acogerse á este honor, porque desean mantener íntegramente todas sus condiciones de ciudadano de su país de origen. Y para qué ocultar, tampoco, que en el fondo del alma de muchos diputados está el recuerdo grato de militares antiguos cubiertos de gloria... Debo nombrarlos también, porque me hago un honor en ello, como el general Fotheringham, el general Cerri... que son dos de los nombres que me vienen á la memoria en este momento.

**Sr. Carlés (M.)** — Las explicaciones que acaba de dar el señor diputado, de que hay algunos militares que se encuentran en una situación incómoda con el proyecto de la Cámara de diputados, son suficientes para que yo vote la indicación del señor diputado, adhiriendo á la sanción del honorable Senado.

**Sr. Roca**—Pido la palabra.

A mi juicio, las prescripciones de esta ley, en vista de los términos precisos y categóricos de la del 69, no pueden referirse á estos dignos jefes que acaba de nombrar el señor diputado por Buenos Aires. Tanto el general Fotheringham como el general Cerri, y quizá algún otro que estaban al servicio de la Nación el año 69, cuando se dictó la

ley de ciudadanía, son ciudadanos argentinos, y por consiguiente las prescripciones de esta ley no se pueden referir en manera alguna á ellos.

**Sr. Presidente**—Se va á votar si se aceptan las modificaciones introducidas por el honorable Senado.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente**—Queda definitivamente sancionado.

8

## LEY ELECTORAL

**Sr. Presidente** — Continúa la discusión de la ley electoral, en particular.

**Sr. Fonrouge**—Pido la palabra.

Lo que primero se ha votado en la sesión anterior ha sido el sistema electoral. Conforme á esta primera votación, que importe aprobar el sistema de lista incompleta, el diputado de la minoría que habla presentó en secretaría un anexo para que figure como artículo primero de todo el despacho.

Creo, pues, que lo que corresponde en este momento es sancionar en particular las disposiciones de ese anexo referente al sistema de la lista incompleta.

**Sr. Padilla (M. M.)**—Pero debemos seguir tratando el despacho de la comisión.

**Sr. Presidente**—La comisión presenta dos artículos nuevos que se van á leer.

—El señor secretario lee:

## TITULO I

### CAPITULO I

#### Del sistema electoral

Artículo 1.º En las elecciones de electores de senadores por la Capital, diputados nacionales y electores de presidente y vicepresidente de la República, cada elector sólo podrá votar por las dos terceras partes del número á elegir en la elección ocurrente, y en caso de resultar una fracción de ese número, por un candidato más.

Cuando se trate de elegir uno ó dos diputados

nacionales, cada elector no podrá dar su voto sino á un número igual de candidatos.

Si en una boleta se inscribieran más nombres que los que corresponden, sólo valdrá el voto para los primeros en el orden en que estén inscriptos hasta completar el número legal.

Si no fuera posible determinar ese orden, será nulo el voto en su totalidad.

Art. 2.º Se proclamarán diputados y electores de senadores y de presidente y de vicepresidente de la República á los que resulten con mayoría de votos hasta completar el número de los candidatos á elegirse, de acuerdo con la convocatoria, y cualesquiera que sea la lista ó listas en que figuren.

Los candidatos que hayan obtenido menor número de votos y que estén comprendidos en el número á que se refiere la disposición anterior, la suerte decidirá cuál ó cuáles serán los proclamados.

El sorteo á que se refiere este artículo será efectuado por la junta electoral creada por el artículo ... de esta ley.

*José Fonrouge.*

**Sr. Presidente**—Está en discusión.

**Sr. Peña**—Pido la palabra.

Hago indicación para que se postergara la consideración de esos artículos hasta llegar al cuarenta y tantos...

**Sr. Fonrouge**—Esa debe ser la verdadera ubicación.

**Sr. Peña**—Mientras tanto, se imprimirán y tendremos ocasión de estudiarlos.

**Sr. Presidente**—; Acepta la comisión?

**Sr. Fonrouge**—Acepta.

**Sr. Presidente**—Está en discusión el artículo 1.º del despacho de la comisión.

—Véase el despacho de la comisión en la página 91.

**Sr. Zambrano**—Pido la palabra.

Creo, señor presidente, que ha llegado el momento de que aporte mi humilde contingente á esta reforma electoral, en que nos encontramos empeñados. Y lo haré, proponiendo que se agreguen las palabras «y que sepan leer y escribir» en el artículo que está en discusión.

La palabra del señor ministro del interior y de los grandes oradores de la cámara—y en este momento me complazco en comprender en el término á los compañeros de ayer, hoy honorables colegas López Mañán y Avellaneda—parece vibrar todavía en este recinto, expresándonos sus íntimos anhelos y haciendo el análisis de nuestra situación política. Ellos han prevenido en la cuestión,

y además tienen la autoridad y la elocuencia que á mí me falta.

He de limitarme, pues, á dejar constancia de que á mi humilde entender y en el plano que desde luego se ofrece á la mirada del legislador, dos son los defectos capitales que presenta nuestra situación política.

En primer término, la falta de un concepto estimulante del deber cívico de votar, en los individuos; y en las agrupaciones, un excepticismo letal que las inhibe de toda acción.

Las causas de esta situación son, indudablemente, múltiples, y tienen, como muchos oradores lo han hecho notar, internado muy hondo su raigambre dentro de nuestro pasado, ó quizá, como otros lo han aducido también, no son al fin sino un resultado de nuestra incipiente histórico-económica, porque no habría corrido todavía lo suficiente nuestra vida, ni se habría intensificado ni diferenciado lo bastante como para florecer en partidos políticos, animados por el resorte poderoso de un interés superior y permanente.

Pero cualquiera que sea la latitud que se quiera atribuir á estas causas ó á estos factores, es indudable que ellos no pueden inhibir la acción reflexiva del Estado en pro del mejoramiento y en su propio interés. Y cualquiera que sea la explicación científica que pueda tener esta situación, es lo cierto que paralelamente á su elaboración ha persistido siempre en nuestro pueblo y en nuestros hombres públicos, cualesquiera que hayan sido sus afinidades políticas, el anhelo de mejorar, de reformar y de llegar cuanto antes á un estado de cosas que signifique paz interna, íntima, que no consiste en la inacción de los espíritus dentro de las formas del orden, sino en la actividad armónica de los mismos. Y ese anhelo que es cada vez mayor, más intenso cuanto es cada vez mayor el progreso material, se ha concretado en la reforma legislativa esta vez, como en etapas anteriores de nuestra evolución.

Tendrá, pues, siempre esta iniciativa del Poder ejecutivo la autoridad superior de ser la interpretación de un anhelo nacional, y convertida en ley, estoy seguro que ha de tener toda la eficacia, toda la vida intensa que deriva de esta circunstancia, porque al

sancionarla el Congreso no habrá hecho, como dice el publicista español Giner, sino cumplir la fórmula según la cual debe moverse la actividad del legislador, que debe consistir únicamente en definir en formas concretas las tendencias que en el fondo de la conciencia general y difusa de la colectividad, va despertando las necesidades de la vida en cada época.

Y estudiada, señor presidente, esta cuestión en el plano que desde luego se ofrece á la actividad del legislador, debía necesariamente surgir, primero, para despertar y mantener la vida de las agrupaciones políticas en primer término, la reforma del sistema con el estímulo de la representación de las minorías; y para llevar al individuo la conciencia clara de su situación ante el Estado en esta faz de la existencia de éste último: el voto obligatorio.

No veo yo el voto obligatorio sólo desde el punto de vista de su correlación con el sistema propuesto, ni tampoco, como me parece que lo presentaba el señor miembro informante de la comisión de negocios constitucionales, como una especie de expediente ó remedio contra el abstencionismo, sino como un exponente de una concepción completa y perfecta de la necesidad de la reforma, que debe comenzar por llevar al espíritu del individuo, por medio de la actuación directa del legislador sobre él, la conciencia clara de que el voto en él no es sino una función que cumple como miembro del cuerpo electoral: carácter que, como dicen los tratadistas, nace de la naturaleza misma del acto que supone el voto y que no excluye por supuesto del concepto del derecho de votar; derecho que, á su vez, como dice Pcsada, nace de la posesión de las cualidades que capacitan para ello, y que una vez tenidas no pueden ser negadas por el Estado.

Y aquí me ha de permitir acentuar la cámara mi diferente manera de pensar con aquellos que han sostenido en este debate, que el voto no es sino una función facultativa, un deber moral, para concluir afirmando su inconstitucionalidad.

Desde luego, encuentro que las expresiones función facultativa y deber moral, á mi humilde juicio, son antinómicas, son contradictorias entre sí, porque

la expresión función facultativa entraña la idea de una acción que el sujeto es libre de realizar ó no, según el dictado de su soberana voluntad; en tanto que la expresión deber moral entraña la idea de un imperativo categórico de cumplimiento ineludible.

Pero dejando de lado esta cuestión que me podría hacer entrar á una discusión casi de orden escolástico, en que desde luego me siento muy inferior á quien pudiera ser mi contradictor, voy á preguntar si es posible hablar de deber moral tratándose del sufragio.

Cuando se trata del sufragio, estamos en pleno campo jurídico, que supone relación entre entidades del derecho; en tanto que cuando se habla de la moral se está en un círculo distinto, cuya definición entraña relaciones de orden muy diferente.

La idea fundamental de la obligación de votar ó del voto obligatorio, radica en el reconocimiento de una entidad distinta de los miembros que la componen y al mismo tiempo es titular de la soberanía: la Nación.

Es necesario, es indispensable, como dice, me parece, Grasserie en su reciente libro, es una necesidad social que la soberanía se exprese en los hechos, que se traduzca en la práctica, vale decir, que la Nación exprese su voluntad.

Esta función está encargada á un cuerpo más ó menos limitado de miembros de la misma nación, designados por la ley, y cuyo conjunto se denomina cuerpo electoral.

No es, pues, una ventaja sino una carga lo que se atribuye al miembro del Estado, porque tiene con la Nación relaciones ó intereses no sólo materiales, como sería el caso del extranjero residente, sino morales; y es entonces presumible que él cumpla esta función, de manera que sirva para el mantenimiento y el progreso del orden nacional, es decir—lo diré en una palabra que todo lo comprenda—la Nación encarga de esta función á sus miembros porque está segura de antemano que sólo ellos podrán cumplirla con patriotismo.

Como se ve, pues, se trata de una relación entre dos entidades de derecho: la Nación y el individuo, ó el miembro de ella, el ciudadano.

La misma justificación jurídica se

obtiene de otro punto de vista, que lo trata en su libro el publicista uruguayo señor Giménez Aréchaga. Dice: la sociedad, la comunidad, tiene la obligación jurídica, perfectamente exigible, de reconocer y realizar los derechos de sus miembros, y también,—explicándola en síntesis,—tiene la obligación de ejecutar todas aquellas medidas tendientes al mismo fin, entre ellas, desde luego, la constitución de las instituciones por medio de las cuales se realizan los derechos individuales en el seno de la comunidad.

Por eso decía el doctor Aristóbulo del Valle, en aquella convención de Buenos Aires, que es clásica sobre la materia, más o menos lo siguiente: Está universalmente admitido que los deberes estrictos son aquellos cuya falta de cumplimiento pueda ocasionar un perjuicio a la sociedad ó a la comunidad, en tanto que los deberes morales son aquellos cuya falta de cumplimiento sólo puede acarrear el perjuicio del individuo que la comete. Se preguntaba después si la falta de votar puede traer un perjuicio a la comunidad ó al individuo, y recordaba que los convencionales que le habían precedido en el uso de la palabra, entre los que estaban el general Mitre, el doctor Luis Sáenz Peña y el doctor Bernardo de Irigoyen, habían demostrado terminantemente cómo la falta de cumplimiento de la obligación de votar, podía llegar hasta el caso,—ya, por otra parte, práctico, sobre todo, creo, en la constitución de la municipalidad de la Capital,—de producir el caso, decía, de no poder llegar a constituirse políticamente la comunidad; y de ahí concluía afirmando que la obligación de votar era perfectamente jurídica y aceptable en la constitución de la provincia de Buenos Aires.

Se trata, pues, de una obligación de orden meramente jurídico. Se desprende también de las palabras del doctor Aristóbulo del Valle, que no es necesario buscar, para justificarla en el orden constitucional, una declaración expresa de la Constitución, como también se exigía en este debate, porque entonces habría que preguntar a los que esto sostienen cuál es la declaración constitucional, por ejemplo, que autoriza a la ley a que exija la inscripción de todos

los actos de la vida civil de los más trascendentales, en el registro respectivo, y también cuál es la declaración constitucional que autoriza al legislador para imponer la obligación de la inscripción mínima en la ley de educación común.

Es que el Congreso nacional tiene todos aquellos poderes que son necesarios para realizar los fines de la Constitución. No es indispensable, entonces, que la Constitución haya declarado en cada caso cuáles serán esos poderes, porque tiene el inciso 28 del artículo 67, que comprende precisamente este concepto con más amplitud, debo notarlo, que la disposición correlativa de la Constitución americana, como se ha reconocido.

Bien, señor presidente. Demostrado así que el voto obligatorio es de la esencia misma del régimen electoral, y demostrado también, como dice M. Duguit, que la consecuencia principal que deriva de haber concebido el voto como una función es que el ciudadano está obligado a votar, como todo funcionario está obligado a desempeñar las funciones de que se encuentra investido, siendo la del elector una carga a la cual no puede substraerse definitivamente, por mi parte diré que así también se sigue que el voto es una función, que ella no puede ser desempeñada por todos los miembros del estado, sino solamente por aquellos que pueden ejercerla.

Para metodizar mejor la exposición de mis ideas, he de permitirme todavía citar las opiniones de algunos autores, entre ellos la del español Giner, a la que había aludido antes, que dice: No hay, pues, un sufragio universal en el sentido literal del término, sino un cuerpo de electores más o menos amplio, pero limitado siempre; ni es este poder un derecho individual, civil ó natural, que pertenezca a cada uno.

Y dice más adelante: que esta función como todas las específicas corresponde por necesidad a determinadas personas; tan sólo a aquellas que tienen la capacidad jurídica necesaria al efecto.

Veo yo que el proyecto del Poder ejecutivo ha seguido estas ideas como no podía menos de ser, al excluir del cuerpo electoral a quienes por diversos motivos no tienen la capacidad jurídica necesaria, aunque, a mi modesto juicio, tratándose de la condición de los analfa-

betos, se ha apartado de la lógica de estos mismos principios.

Y bien sé que tanto los tratadistas como las legislaciones se dividen al respecto, y que, por ejemplo, a la autoridad de la Francia podría yo oponer la de Bélgica, la de Portugal, la de Italia, la de Rumania, la de algunos estados de la Unión Americana y la de muchos estados de Sud América; y sé también que a la autoridad de Spencer podría oponer la de Stuart Mill; pero yo no traigo ni quiero traer una cuestión de orden teórico ó doctrinario, cuya resolución corresponde hacer sólo por las especulaciones científicas: quiero únicamente llamar la atención de mis honorables colegas hacia la acción que tienen en nuestras luchas democráticas esas masas de campesinos que sin tener instrucción primaria no tienen la más mínima independencia personal.

Todos sabemos el cuadro que presentan esas masas. El día fijado para la elección se reúnen por mandato del patrón, y sin la más mínima conciencia del acto que van a realizar, concurren a votar, llevados por el capataz de la finca ó de la estancia, ó por cualquier práctico de la vecindad. Agrupados en lugares convenientes, generalmente encerrados en grandes locales, donde han podido desensillar, bajo la severa consigna de no salir a la calle, desde que se ha hecho necesario conservar el orden y mantener el número, absolutamente extrañas sus almas ingenuas a la actuación que realizan, pero con la conciencia vaga, confusa y casi dolorosa de su propia ineptitud; su única idea, su única preocupación es la de beber y terminar cuanto antes aquel acto, para recibir la consabida recompensa en dinero, su peso, que ni siquiera lo reciben como el precio de una venta, sino como una bondad espontánea ó una largueza del niño desconocido que viniera de la ciudad.

Cualquiera que sea la extensión que quiera darse al sufragio, y cualquiera que sea nuestra liberalidad, es evidente que respecto de esos electores faltan las condiciones más elementales que el sufragio supone, las más fundamentales. Desde luego, el sufragio supone un minimum de capacidad en el elector, una idea siquiera rudimentaria del acto que va a ejecutar y un minimum de independen-

cia personal, de voluntad, ó como decía mi ilustrado maestro de derecho constitucional y hoy honorable colega, el doctor Montes de Oca, es indispensable que reúna interés, capacidad ó independencia personal.

Y no se puede creer que tengan el más mínimo interés ni capacidad estas pobres almas. Para verificarlo, basta preguntarle lo más simple, lo más elemental, lo que sin duda debe estar al alcance de todo elector: ¿por quién ha votado? Los más discretos, los más inteligentes, pero los menos, contestan que no lo saben; la mayor parte, ya lo sabemos, contesta que ha votado por el patrón. Ni es posible, tampoco, atribuirles la más mínima independencia personal. Niños grandes, bien sabemos que proceden en todo aquello que más de cerca les atañe, guiados por la masa caótica de sus instintos, de sus apetitos, de sus impresiones vagas, sin otro rumbo, respecto de ciertos actos, que un interés muy vago y confuso, y sin otro móvil respecto de ciertos otros, que el impulso imperioso que estimula tanto la vida vegetativa que llevan.

La casi totalidad de nuestros analfabetos la compone estas masas de campesinos. Es verdad que en las ciudades y pueblos de la República hay una masa considerable de niños que no reciben la instrucción primaria, pero es lo cierto que cuando llegan a los diez y ocho años de edad la casi totalidad ha adquirido aquellas nociones fundamentales que son indispensables para la formación del criterio del ciudadano, nociones que, por así decir, vagan en la atmósfera de todo centro urbano, por reducido que sea.

Por otra parte, el hombre del campo que ha recibido la instrucción primaria, que se exterioriza para la generalidad de los casos en las facultades de saber leer y escribir, ha incorporado a su espíritu, desde luego, la conciencia de la nacionalidad, por el conocimiento de la unidad histórica y geográfica que ha recibido desde los primeros grados de la escuela, y tiene también una idea, si quiera sea muy rudimentaria, si quiera sea muy elemental, de la constitución política de la nación, ó por lo menos del pueblo en que reside ó del departamento ó partido de que forma parte.

Además, señor presidente, el hombre

de campo que ha recibido instrucción primaria, ha incorporado fuerzas á su espíritu que tienden á hacerle salir de aquel estado de absoluta subordinación en que generalmente vive. Hace un pequeño ahorro, adquiere un pequeño terreno, lo arrienda; en fin, adquiere alguna independencia personal, algún dominio sobre sí mismo; y entonces es lógico suponer que la influencia del patrón se acerque siquiera á aquella influencia persuasiva de que hablaba el senador Paz, en el Congreso de Paraná en 1857.

La precedencia constitucional de la medida que me atrevo á proponer á la honorable cámara, á mi juicio, se encierra en el hecho de que la Constitución admite el principio del sufragio universal, y que este principio, como dice Vilely, es reconocido, siempre que el sufragio se abra á todos bajo las mismas condiciones, y siempre que estas condiciones tengan por objeto excluir del cuerpo electoral de la Nación á todos aquellos que no son capaces de desempeñar esas funciones, por razones tomadas en la persona misma y sin consideración alguna á la fortuna, al nacimiento ó á cualquier otro título ó privilegio social...

Y como dice el mismo autor más adelante, la fórmula del sufragio universal no significa, no puede significar sufragio ejercido por todos, sino sufragio abierto á todos, bajo las mismas condiciones.

Es dentro de la línea de estas mismas ideas que esta medida ha sido aceptada por muchas legislaciones, como lo reconoce el mismo autor, aunque él no la admite para Francia, porque conoce campesinos, dice, que sin saber leer ni escribir tienen muy buen juicio y manejan muy bien sus negocios, circunstancias que, sin duda, no reúnen nuestros analfabetos; y en consecuencia, esta observación es favorable á la tesis que sustento.

Entre las naciones que han adoptado estos principios están, entre las americanas, dos estados de los Estados Unidos, y además Chile, Brasil, Bolivia, Perú, etc., antecedente que es favorable, tanto del punto de vista de medios ambientes tan republicanos, tan democráticos como el nuestro, como desde el punto de vista de la semejanza que tie-

nen con el nuestro los pueblos donde estos principios han sido adoptados. En Europa he mencionado ya á Bélgica, Rumania, Italia, Portugal y no sé si se me escapa algún otro país.

Por otra parte, algunos otros países europeos han limitado el sufragio de otro punto de vista, por ejemplo, Inglaterra, y puedo añadir á algunos estados de la Unión Americana.

Cuando se discutió, señor presidente, esta medida, con motivo de la reforma electoral en 1902, en la honorable cámara de diputados, el doctor González puso todo el peso de su autoridad en contra de ella, manifestando que el derecho del sufragio era ejercido por todos y llevaban á él sus elementos de juicio todas las personas, fueran analfabetas ó fueran letradas, como él decía, porque, manifestaba, la voluntad no se forma sólo por el ejercicio de las facultades intelectuales, sino que surge de un conjunto de elementos psíquicos, entre los que se encuentra el sentimiento, y se preguntaba: ¿cómo hemos de desconocer que una persona iletrada, analfabeta, tiene el sentimiento de su deber cívico, de que tal persona ha de representar mejor que otra los intereses de su vecindario?

Me atrevo yo á volver la vista sobre aquellas turbas ó masas de nuestros campesinos que son llevados al sufragio, al comicio, y que pasan por él sin que haya ocurrido la más mínima vibración en las conciencias rudimentarias de sus componentes; yo me atrevo á volver la vista á esos ojos tan llenos de ingenuidad, de ignorancia, de infantilismo, á que sirven de marco toscos, esas caras greñudas y mansas, y encuentro que de la pregunta del maestro y del estadista descollante, bien puede afirmarse lo mismo que él dice de esta exigencia de la exclusión de los analfabetos: indudablemente, muchas de las teorías son muy bellas pero no son siempre aplicables á nuestro país.

Además, señor presidente, encuentro que hay algunas ideas en el proyecto que son incongruentes, me atreveré á decir, con el hecho de la autorización en que quedan en el mismo proyecto los analfabetos, para votar.

Desde luego, se acepta en el proyecto la idea del voto obligatorio, con carácter compulsivo. Significa esto acep-

tar que, siendo el sufragio una función, crea, entre el estado y el ciudadano una relación jurídica estricta á que corresponde, como deber de la misma naturaleza, la obligación de votar. Pero los analfabetos, señor presidente, no están exigidos en la misma forma: para ellos y podría decirse quizá que el sufragio es, como decía el señor diputado Ferrer, un deber moral. Pero me explicaría que un deber de esta naturaleza fuera declarado para quienes tienen la capacidad de comprenderlo, de sentirlo; me explicaría que lo fuera respecto de los alfabetos, de los que tienen siquiera la instrucción primaria, ó es que el proyecto se propone llegar á la exclusión de ellos, y en ese caso no debió dejáries autorizados á votar.

Por otra parte, monsieur de la Grasse, tratando de esta misma materia, dice, refiriéndose á la exigencia de saber leer y escribir, que tiene ella, desde luego, como fundamento la necesidad de que el elector tenga la idea, la seguridad, de lo que va á realizar, porque elector que no sepa leer ni escribir puede fácilmente ser engañado por un tercero que le dé ó le cambie por otro el boleto que el quiera presentar. ¿Cómo puede asegurarse el elector, agrega, si no tiene la posibilidad de leer lo que el boleto dice? No tendrá más remedio que preguntárselo á otra persona. Entonces, pregunta: ¿á qué queda reducido el secreto del sufragio? Luego, dice, asegurar que el sufragio sea secreto de una manera absoluta. En el sistema de la ley belga, parecido ó análogo en esta parte al que establece este proyecto de ley, entra el elector al lugar reservado para el comicio, donde recibe las boletas, uniformemente impresas, y un sobre, con lo cual se retira al local donde se halla la urna. Allí debe escoger, leer desde luego, separar ó añadir, para lo cual necesita también saber escribir, á fin de colocar la expresión de su voluntad dentro del sobre que arrojará en la urna. Según el sistema propuesto por el proyecto, el elector debe presentarse al local reservado para las elecciones, guardando su boleta en el bolsillo, porque, de acuerdo con el artículo 51, me parece, no puede llevarla en la mano. Una vez allí recibe un sobre dentro del cual deberá, una vez en la habitación donde está la ur-

na, colocar la boleta y depositarla en la urna.

Y me pregunto yo: si el elector saca del bolsillo papeles de formato más ó menos parecido á aquel que encerrara la expresión de su soberana voluntad, ¿cómo procedería á verificar, en el caso de que el formato no fuera suficientemente desigual ó que su memoria visual no fuera suficientemente feliz? No le quedará otro recurso que consultar al presidente de la mesa ó echar á la suerte un papel dentro del sobre y depositarlo en la urna.

**Sr. Meyer Pellegrini**—Es el caso de que las listas lleven un signo exterior como se hace en los Estados Unidos, en que cada partido encabeza su lista con un emblema.

**Sr. Calvo**—Son teorías; vamos, después, á la práctica.

**Sr. Zambrano**—Me permito contestarle al señor diputado que la forma que indica demuestra mejor la falta absoluta de capacidad en el elector analfabeto, reduciendo á su acto á un mero automatismo.

Pero, antes de terminar, voy á permitirme contemplar, una vez más, el cuadro de nuestras costumbres políticas, porque veo que estoy cansando á mis colegas y siento también la necesidad de terminar... (*En las bancas:* «No! No!») No tengo la práctica de estas exposiciones más ó menos largas...

Contemplo, señor presidente, la vida cívica agitando en las ciudades, en los pueblos, en las simples aldeas esparcidas sobre la inmensidad de nuestro territorio: divide y subdivide los partidos políticos, se irradia por todas partes, penetra en las campañas, agita el pequeño propietario, al pequeño arrendatario y hasta al jornalero libre de los campos, para detener su vida en el cerco mismo que delimita la gran propiedad. ¿Por qué? Porque allí dentro está todavía el patrón de antaño, sentado en el corredor de la casa solariega, epilogando seguramente la siesta estival y considerando en ensueños atávicos que es la misma grey de otrora la que en ese momento tuesta sus espaldas bajo el sol, dentro de sus dominios. Y allí, en ese cerco no solamente se detiene todavía el derecho público; se detiene en mucha parte también, el derecho privado. Y no sería un mal esto si

toda esa vida de antaño, al pasar de padres á hijos, con los bienes de la fortuna, hubiera trasplantado al alma del sucesor todo el patriotismo y todas las virtudes morales que formaban el alma del abuelo colonial. Pero desgraciadamente para nosotros, el patrón de hoy día tiene otros factores en su espíritu, como que ha nacido en un medio muy distinto, en que las cualidades inferiores de la lucha han preponderado sobre las partes más nobles del espíritu. El patrón de hoy siente el afán del lucro, tiene una íntima sonrisa para los ideales y cultiva con especialidad las formas. En las funciones electorales, no es jamás opositor, y casi siempre es gubernista. La ciudad le atrae; siente la necesidad de ir á ella, generalmente después de la cosecha, á recibir los halagos de la gente de gobierno, porque esta correlación le supone también la seguridad de mantener el pequeño puesto para el hijo ó la beca para la hija, y sobre todo, le mantiene la seguridad de tener siempre á su disposición esa situación de caudillo-autoridad y todas las granjerías que esta situación supone.

Veo yo en este elemento una de las causas determinantes de este estado de cosas, como lo llamaba el señor ministro del interior. Veo una de las piezas de esa máquina á que aludía el señor diputado Peña, y lo veo también á *Elizalde*, entidad tan bien caracterizada por el señor diputado Roca, que, para más prestigioso decoro, podría dentro de nuestra gauchoeracia, llamarse *don Elizalde*.

Cuando se trató de esta reforma en 1902, se dijo también que ésta era una medida que repugnaba á nuestro ambiente republicano. Me atreveré á afirmar que respecto del caso concreto que tenemos ante nuestra vista, abogar por la exclusión de los analfabetos del cuerpo electoral de la nación, es abogar por la realización del ideal republicano, de la vida democrática, porque es descontar de las funciones electorales, un elemento que tiene toda la acción de un verdadero privilegio social: el propietario de nuestros latifundios, ó es reducirlo á su más mínima expresión, porque desde luego no podrá ya manejar esa masa enorme que humildemente le sigue; y sobre la que le resta, seguramente, su acción no será de la misma naturaleza, y aunque

lo fuera, se reducirá á actuar sobre un número muy pequeño.

Pero, además, debo decir, que esta proposición será el resorte más eficaz para obtener la reducción del analfabetismo, anhelo para cuya realización necesitamos usar un estímulo más poderoso que la difícil práctica de la sanción de la ley de educación común,—lo que ha acontecido en naciones que han adoptado la medida.

En sesiones pasadas, señor presidente, el señor diputado Cárcano, mi honorable colega, con la galanura de su estilo tan selecto, nos relataba el conocido pasaje de Clemente de Alejandria, para decirnos que él otorgaría su voto al proyecto propuesto por el Poder ejecutivo en la esperanza de no encontrar la bestia simbólica cuando se descorrieran las cortinas de púrpura que encerrarán la nueva urna electoral...

Me atreveré yo á decirle, señor presidente, que al cerrar las puertas de la habitación donde por mandato de la nueva ley se ha de encontrar la urna en adelante, ha olvidado adentro al monstruo temible, y que en consecuencia, no es de extrañar que se le vuelva á encontrar... Sólo que en vez de la púrpura y de los sacerdotes con que las gentes del antiguo Egipto honraban sus extrañas divinidades, mi ilustre colega lo encontrará, seguramente, bajo el corredor de alguna casa solariega de nuestros grandes latifundios, sonriendo socarronamente quizá ante el «Diario de sesiones» de aquel día, mientras recibe el mate de las manos de la criadita y espera que el sol decline y haga agradable la revisión de los recientes sembradíos.

He terminado. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

**Sr. Fonrouge**—Pido la palabra.

Realmente, sería una tarea sumamente ardua la que pesaría sobre los hombros del miembro informante, si la discusión en particular de todos los artículos del proyecto, siguiera en la forma en que acaba de iniciarla en el artículo 1.º el señor diputado Zambrano, por medio de una exposición tan ilustrada como nutrida de citas de autores y de naciones que han adoptado los diversos sis-

temas. Pero felizmente, esta tarea ha de ser compartida con los demás miembros de la comisión.

Por lo pronto, voy á contestar muy sucintamente al señor diputado sobre un tema que no ofrece novedad, porque es sumamente conocida la discusión que se ha hecho alrededor del voto universal y del voto calificado, así como los argumentos que hay en pro y en contra de uno y de otro sistema. Excluiré, pues, de la discusión, todo lo que se refiere á la parte doctrinaria.

Es fuera de duda que imaginarse una democracia sin analfabetismo, es imaginarse la democracia ideal; y á eso tienden todos los esfuerzos de las sociedades bien constituidas, y muy especialmente de la nuestra, que destina grandes sumas al propósito de combatir ese mal. Pero no debemos olvidar, señor presidente, y eso es lo que ha tenido muy en cuenta la comisión, que nuestra democracia reposa sobre el principio de la igualdad, y que ella no ha podido en manera alguna declarar incapaces á los analfabetos para las funciones políticas, como no habría podido el codificador declararlos incapaces para las funciones de la vida civil, para el matrimonio, para disponer de sus bienes, para hacer testamento, para comprar, para vender, etc.

El señor diputado, para sostener su tesis, arranca del principio de que el voto es una función pública, es una carga, no es un derecho.

Esta también es otra apreciación que ha dado lugar á grandes debates muy conocidos de todos los que se han ocupado de esta materia. Es indudable que la Constitución argentina ha creído, partiendo de la base de la democracia, que el votar es una función pública, que es un derecho. No lo ha dicho, ni lo dice el proyecto de ley, porque sería una redundancia, pues eso está comprendido virtualmente en el título «Declaraciones, derechos y garantías» de la Constitución nacional. Incluirlo como un derecho, á imitación de lo que ha hecho últimamente la ley española, habría implícitamente significado que el Congreso puede en un momento dado negarle ese carácter.

Es así, señor presidente, que la comisión se ha concretado á establecer la obligación de votar, y las penalidades

en el caso de que no se cumpliera con esta obligación; y ha tenido una indulgencia muy justa para los analfabetos, exonerándolos de toda penalidad cuando dejaran de votar, precisamente por muchas de las razones que ha dado el señor diputado; porque á ella no ha podido escapársele que el analfabeto no tiene una noción tan exacta, como la tiene aquel que es alfabeto, para el cumplimiento de sus derechos y de sus obligaciones. Pero ha chocado con el principio de la igualdad, que en este caso vendría á quebrantar una estricta disposición de la Constitución, al establecer la abolición de los rangos, las prerrogativas y las distinciones de castas; y no significaría otra cosa, excluir á los analfabetos, si se aceptara lo que propone el señor diputado.

No deseo, señor presidente, como miembro de la comisión de negocios constitucionales, hacer una réplica de todas las razones expuestas por el señor diputado en su meditada exposición, y por eso, concretándome á los propósitos de la misma comisión, dejo así sucintamente manifestado que ella, sin negar, sin desconocer que el ideal sería que todos supieran leer y escribir, ha entendido que implícitamente no podía desconocer que á la obligación de votar corresponde un derecho de votar que está clara y textualmente consagrado por la Constitución; y es evidente que todas esas razones que tienden á calificar el voto, en la forma propuesta por el señor diputado Zambrano, importarían violar esa disposición constitucional, quebrantando el principio de igualdad que debe regir entre todos los ciudadanos argentinos.

Por estas razones la comisión aconseja la sanción del artículo tal cual viene propuesto en su despacho.

**Sr. Avellaneda**—Pido la palabra.

Mi disidencia con el señor miembro informante de la comisión me obliga á molestar dos minutos la atención de la honorable cámara.

Descarto la faz constitucional del agregado propuesto. La Constitución sólo nos habla de representantes del pueblo, y todos nosotros sabemos que el pueblo significa una reunión numerosa de individuos independientes. En este vocablo, como acertadamente nos decía el señor diputado Monte de Oca están



comprendidos los nacionales y los extranjeros, las mujeres y los niños, todos los individuos, sea cual fuere la situación legal en que se encuentren; y no votando las mujeres, ni los niños, ni los indignos, ni los incapaces, á mi juicio no se puede tachar de inconstitucional una ley que diga: tampoco pueden votar los analfabetos.

Y, francamente resultaría curioso que esta cámara, en la que parece predominar una interpretación constitucional en extremo flexible, después de haber aprobado la lista incompleta y de haber aplaudido con el entusiasmo que lo hizo la palabra por tantos conceptos autorizada del señor diputado por la Capital, cuando decía que en su opinión, dentro del artículo 37, tienen cabida todos los regímenes electorales, hasta aquellos sistemas que persiguen la representación proporcional, resultaría curioso, digo, que tachara de inconstitucional una ley que viniera á calificar el voto.

Descarto asimismo la discusión doctrinaria que pudiera hacerse sobre argumentos basados en el pretendido principio del sufragio universal, que no es tal principio, que es un simple enunciado, que es una simple combinación de palabras, lanzadas por los teóricos, que en la realidad no ha de existir jamás.

Reduciendo, entonces, la cuestión á sus términos más sencillos, dejo constancia de mi adhesión á la iniciativa promovida por el señor diputado por Salta. Porque si todos nosotros estamos empeñados en el perfeccionamiento electoral, se me ocurre que para lograrlo debemos empezar por seleccionar el sufragio, para seleccionarlo debemos calificarlo y para calificarlo, reducirlo, y para llegar á ello, principiar por lo que es natural, por excluir de la ley electoral á los analfabetos por excluir de esta ley, en que quizá repose la felicidad de la Nación, á todos aquellos que deliberadamente han cerrado sus ojos á la luz de la inteligencia, poniéndose afuera de la civilización y de la cultura, que es la gran ley universal.

Con estas breves palabras, dejo, como miembro de la comisión de negocios constitucionales, constancia de mi voto favorable á la feliz iniciativa del señor diputado por Salta.

**Sr. Lacasa**—Pido la palabra.

Voy á fundar brevemente mi voto en favor del artículo de la comisión.

Crec, señor presidente, que el sufragio universal debemos entenderlo con la universalidad que le da el artículo, es decir, para los ciudadanos. Así lo consagra el derecho político, la tradición y el precepto constitucional.

La ley no puede hacer otra cosa. Porque, como ha dicho muy bien el señor miembro informante de la mayoría de la comisión, el sufragio es un derecho y un derecho perfectamente establecido por el artículo 33 de la Constitución, cuando se refiere á todos los derechos, aunque no estén enumerados, pero que nazcan de la naturaleza misma de la soberanía del pueblo.

Este derecho no ha nacido porque sí. Es un derecho que nace coetáneamente y es correlativo con el deber que tiene el ciudadano de armarse en defensa de la patria.

**Sr. Zambrano**—¿Me permite el señor diputado?...

**Sr. Lacasa**—A ese ciudadano no se le pregunta si sabe leer ó escribir, en el momento en que tiene que servir; simplemente se le llama por la ley á servir, y cuando tiene que marchar á campaña, marcha y afronta todos los peligros, rindiendo su vida, si es necesario, por la patria.

**Sr. Zambrano**—¿Me permite el señor diputado?...

**Sr. Avellaneda**—Ese argumento ha sido contestado diciendo que es precisamente la tropa de línea la que no vota.

**Sr. Zambrano**—Justamente es lo que iba á preguntar al señor diputado.

**Sr. Lacasa**—Perfectamente, pero el derecho correlativo de ese deber debe reconocerse no acordarse, porque hay una ley que establece el servicio militar obligatorio para todos los ciudadanos. Servicio militar es el deber y sufragio universal es el derecho...

No es, pues, una función, como se ha dado en llamarla. Yo creo que es más que una función: es un órgano de la Constitución, que, si no es ejercitado, no estará en aptitud de funcionar. Se llama función para limitarla ó poder limitarla, pero eso no es posible.

Creo que la comisión, en este caso, ha procedido acertadamente y de acuerdo con la Constitución. No se puede

establecer una regla fija para medir la capacidad de las personas. Saber leer y escribir no es una condición de superioridad. Así se ha establecido por algunos autores. Podría citar un autor inglés, Stuart Mill, que dice que el elector debe saber leer, escribir y regla de tres. Hay otros que exigen que sepa las reglas elementales de la instrucción. Pero resulta que no es un índice de superioridad. Por ejemplo, hay algunas regiones de España, cuyos habitantes son tenidos por no muy despiertos, y que, no obstante, todos saben leer, escribir y contar. De manera, que esto no revela una capacidad superior. Hay personas que con la sola aptitud natural saben lo que deben hacer; y cuando no lo saben, tienen alguien á quien preguntarle. Porque no sólo preguntan los pobres analfabetos, preguntan los doctos cómo deben votar, y entonces yo digo: si los doctos hacen eso, ¿qué hay de particular en que los demás ciudadanos consulten á los que estén en mejores condiciones y en los cuales tienen plena confianza?

No creo yo que la capacidad nazca de eso.

Opino también, como ha dicho el señor diputado Fonrouge, que se llegará á un resultado satisfactorio con la difusión de la instrucción, y que entonces los ciudadanos estarán más habilitados; pero no creo que con estas razones pueda llegarse á la supresión de un derecho tan sagrado como es el derecho de sufragio.

Con estas palabras, dejo fundado mi voto á favor del artículo (*¡Muy bien!*)

**Sr. Zambrano**—Pido la palabra.

Para pronunciar muy pocas, á fin de hacer constar que no está demostrada en forma alguna la inconstitucionalidad de la medida que he propuesto.

El señor miembro informante de la comisión nos hablaba de la igualdad que consagra la Constitución entre todos los habitantes de la Nación.

Para demostrar la inconsistencia de este argumento, me bastaría preguntar al miembro informante cómo es posible que no obstante ese principio, la comisión haya propiciado en el mismo proyecto una serie de exclusiones relativas á personas que indudablemente forman parte del pueblo como las que figuran en el artículo 2.º del proyecto.

Respecto de la medida en sí, de su

trascendencia política á que aludía el señor diputado Lacasa, me basta decirle que yo no propongo precisamente la exclusión de los analfabetos por el hecho solo de su incapacidad, sino que propongo esa exclusión directamente, por el hecho de que los analfabetos constituyen esas grandes masas á que he aludido y que hasta el día de hoy pesan sobre nuestras comicios, manejadas exclusivamente por una sola voluntad.

Con estas breves palabras, señor presidente, me atrevo á insistir en la medida que he propuesto.

**Sr. Costa**—Pido la palabra.

Deseo saber si el señor diputado por Salta ha propuesto alguna modificación...

**Sr. Zambrano**—Un añadido.

**Sr. Costa**—... al texto de este artículo, en el sentido de su indicación, porque si él propone un pronunciamiento de la cámara con relación al voto obligatorio, me parece que ese pronunciamiento no puede ni debe hacerse en este artículo primero, sino al tratarse del artículo 6.º, que establece que «todo elector tiene la obligación de votar en cuantas elecciones nacionales fueran convocadas».

**Sr. Calvo**—Es respecto de los analfabetos: no es al voto obligatorio.

**Sr. Zambrano**—He propuesto simplemente la exclusión de los analfabetos.

**Sr. Costa**—Como trataba la cuestión del voto obligatorio.

**Sr. Zambrano**—Es cierto, pero incidentalmente, con el objeto de precisar mis ideas.

**Sr. Costa**—El señor diputado por Salta dijo que la obligación de votar es una carga pública, me parece.

**Sr. Zambrano**—Se desprende así de mi exposición.

**Sr. Costa**—Le quiero hacer notar que si funda también su argumentación en que es una carga pública la función del voto, la Constitución establece en su artículo 16 que «la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas».

**Sr. Zambrano**—Con la condición de la idoneidad, que es un principio favorable á la proposición que he hecho.

**Sr. Costa**—De manera que siendo el voto una carga pública, según el señor diputado, y teniendo los analfabetos la obligación de votar, como carga pública, deben ser comprendidos en esta obligación con arreglo al artículo 16 de la Constitución.

**Sr. Zambrano**—Pero el señor diputado no recuerda que ese artículo exige la condición de la idoneidad.

**Sr. Costa**—La idoneidad se refiere precisamente al caso en que la función no es carga pública, porque se refiere al ejercicio de empleos que no son carga pública. El voto es carga pública y se rige por el principio de la Constitución que establece la igualdad para las cargas públicas y para el impuesto. Por consiguiente, esa condición de igualdad debe alcanzar á los analfabetos como á los alfabetos.

Aparte de estar también conforme con el señor diputado por Buenos Aires, doctor Lacasa, en cuanto establecía—no sé si lo establecía, pero lo establezco yo—(*Risas*) que la condición de ser analfabeto, no implica, desde luego, *per se*, una inferioridad mental ni moral. Tan es así, que tratándose de asuntos relativos al ejercicio de la libertad política sería preferible el voto de un americano del norte, ó de un holandés analfabeto, al de un chino que supiera perfectamente leer y escribir.

Leer y escribir es un mecanismo. Sabios antiguos eran analfabetos.

Además, hay que ver que en el origen de nuestras instituciones fueron incluidos desde un principio, en nuestros estatutos relativos al régimen político, los indios, acordándoseles los mismos derechos que á los demás ciudadanos: lo que demuestra ya que los que iniciaban nuestra organización no tenían en cuenta esa circunstancia como una inferioridad que pudiera establecer una diferenciación en los derechos cívicos.

Nada más; quería hacer una simple observación en el sentido de establecer que si resolvemos excluir á los analfabetos del derecho del voto, y siendo éste carga pública, haríamos una aplicación violatoria del artículo 16 de la Constitución. (*¡Muy bien!*)

**Sr. González Bonorino**—Convendría conocer la opinión del Poder ejecutivo sobre el agregado propuesto.

**Sr. Ministro del interior**—Pido la palabra.

El texto del artículo indica suficientemente la opinión del Poder ejecutivo, que ha tenido muy en cuenta la aspiración general y legítima de que el voto sea dado por los competentes. Cuando

más competentes sean los electores, más fundada la presunción de que mejor será la elección.

Hay dos medios de llegar á este resultado: el uno, educar al elector, para que se haga competente, mejorando su condición económica; el otro, excluirlo. Desde luego, el Poder ejecutivo está en el primer sistema; por eso no ha establecido el segundo en el proyecto.

Por otra parte, considera el Poder ejecutivo que la Constitución quiere que sea el pueblo el que elija, sin distinción de capacidad.

Para mí no cabe duda respecto del sentido de la palabra pueblo, empleada por la Constitución en el artículo 37, por una razón muy sencilla: es el pueblo de los distritos el que elige, á razón de un diputado por cada treinta y tres mil habitantes. De manera que en ese artículo está establecida la oposición entre el pueblo y habitante. Habitantes son todos los que residen en el territorio; pueblo es el que tiene el derecho de elegir, es decir, pueblo es el ciudadano elector.

Bien, pero, ¿quién es el ciudadano elector? El artículo 33 de la Constitución, tan conocido, dice que los principios, declaraciones y garantías de la Constitución no son opuestos á los principios que nacen de la soberanía del pueblo, y es bien sabido que el principio de la soberanía del pueblo significa esto: la función de elegir opuesta al privilegio. El gobierno antes era de los privilegiados; ahora el gobierno es del soberano, del pueblo. De manera que, sin ciertas causas legales que tengan calidad de pena ó sólo por ciertas consideraciones políticas muy fundamentales, no se puede privar á un ciudadano de la ocasión de cumplir la función electoral.

He concluido.

**Sr. Presidente**—Hemos quedado como los analfabetos, sin poder votar.

**Sr. Zambrano**—Mientras tanto, se podría hacer constar que la Constitución, cuando ha dicho «pueblos», no lo ha definido; ha dejado la definición de ese concepto á la ley, á esta ley precisamente que estamos discutiendo, la ley electoral.

**Sr. Presidente**—Invito á la cámara á pasar á cuarto intermedio.